Plaza pública

► *El homicidio de Mario Colín*

► *Algo (sórdido) flota sobre el agua*

Miguel Angel Granados Chapa

La muerte del abogado y político Mario Colín excede los límites de la nota roja. Fue así desde un principio, cuando quien fuera diputado federal por tres ocasiones fue baleado cerca de su casa en Cuernavaca. Pero lo es más en vista del desarrollo que el asunto ha tenido.

Los personajes involucrados harían, de por sí, fascinante esta historia. La víctima, Colín Sánchez, fue un persistente difusor de la cultura de su entidad natal, el estado de México. Sirvió a varios gobiernos en ese lugar, en una curva tan amplia que comprende desde el primero hasta el segundo Alfredo del Mazo, con más de 30 años de diferencia entre una y otra circunstancias. Del primero fue secretario particular, en la segunda mitad de los cuarentas, y al comenzar el gobierno del segundo quedó a cargo de la Secretaría de Educación-local, un puesto de gran relevancia, porque el sistema escolar del que se responsabilizan las autoridades locales excede en número e importancia al que ejerce allí el gobierno federal. Probablemente por desacuerdos políticos, Colín renunció y puso fin, al menos en apariencia, a una carrera que se inició como juez en Tlalnepantla y lo llevó tres veces a la Cámara federal. Había reunido también una fortuna, al punto de que había adquirido una hacienda (que vale decenas de millones de pesos) donde se concentraría la riqueza cultural que reunió sobre el estado de México, para legarla a los pobladores de su solar nativo.

Desde hace unos 30 años, Colín compartía su vida con María Asúnsolo, una figura legendaria en las artes mexicanas. Nacida en Chilpancingo, se ha escrito de ella que "no hay mujer mexicana en el siglo actual que haya inspirado mayor número de obras de arte". Le hicieron, en efecto, retratos o esculturas Siqueiros, Diego Rivera, Juan Soriano, Jesús Guerrero Galván, Raúl Anguiano, Carlos Orozco Romero, Federico Cantú, Jesús Escobedo, Nefero, María Izquierdo, Antonio Peláez, D'Cavalcanti, Enrico Sanpietro, Ignacio Asúnsolo, Luis Ortiz Monasterio y Octavio Ponzanelli.

Colín fue asaltado y falleció varios días después de que sus agresores lo hirieron. Lo auxilió su amigo el doctor Luis Fermín Cuéllar, político también, que figuró en la Confederación Nacional de Organizaciones Populares y hasta este momento era funcionario del gobierno de Morelos, pues se trata de una persona muy allegada al gobernador Lauro Ortega. Este médico fue detenido en Cuernavaca por la Policía Judicial de la ciudad de México, acusado de ser cómplice de Agustín Diener, hijo de María Asúnsolo, a quien la propia policía judicial acusó de haber instigado la comisión del homicidio, por razones económicas.

Para concluir el cuadro, el presunto asesino material es una persona que no se llama como dicen sus delatores que se llama, y que asegura no ser sobrino de sus propios delatores, que en cambio afirman que sí es su sobrino, y que participó en actividades guerrilleras en Guerrero.

El enredo, que sería muy gracioso de no envolver situaciones gravísimas, ha terminado en esta fase, al modo de las mejores comedias de equivocaciones: todos los inculpados quedaron libres ayer.

Por la relevancia de los personajes, y por las circunstancias presentes en la comisión del crimen y en su persecución el asunto es muy llamativo. Debiera ser importante todo otro caso de privación de la vida de una persona. Pero así son las cosas en nuestra sociedad. Debiera servir como ejemplo este episodio, sin embargo, para enseñar la muy lamentable actuación de las corporaciones policiacas, que infringen la ley casi alegremente, sin que la buena voluntad de sus jefes (especialmente la de la procuradora Victoria Adato de Ibarra) tenga la mínima eficacia contra su arbitrariedad.

Como si fuera un organismo federal, la policía capitalina se pasea por todo el país deteniendo a los presuntos responsables de este homicidio, que sin embargo se cometió en tierras morelenses. No aspiramos, naturalmente, a que el crimen quede impune en aras de la pureza constitucional. Pero si la propia agencia encargada de perseguir los delitos pone el mal ejemplo de incurrir en abiertas violaciones a la legalidad, mal se puede pedir a los ciudadanos que cumplan sus deberes y ejerzan sus derechos. Y si para colmo, a la arbitrariedad se añade la ineptitud, se cae en un ridículo que no debiera quedar impune.